**«MODELOS DE ORGANIZACION EN LOS CENTROS
PENITENCIARIOS.
LA PARTICIPACION DEL INTERNO»***

Luis GARRIDO GUZMAN

Profesor Titular de Derecho penal

* Ponencia presentada a las II Jornadas Penitenciarias Andaluzas celebradas en la Facultad de Derecho de Jerez de la Frontera (diciembre, 1983)

CONSIDERACIONES PREVIAS

Durante los últimos años hemos asistido en nuestro país a una oleada de incendios, motines, plantes y revueltas en los establecimientos penitenciarios, motivados por una serie de reivindicaciones que se centraron, en un primer momento, en la demanda de amnistía para todos los que, por una u otra causa, se encontraban internados en centros penitenciarios. El movimiento reivindicativo de los presos comunes adquirió proporciones y cotas dramáticas con la muerte violenta del recluso Agustín Rueda en Carabanchel, el 14 de marzo de 1978, y con el asesinato del Director General de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad, el 22 del mismo mes y año. Desde aquellas fechas, y cada vez con menos frecuencia se sucedieron algunas revueltas en diversos centros carcelarios hasta llegar a una fase de *sosiego externo aparente* durante el año 1979, dadas las expectativas puestas en la reforma penitenciaria, cuyo primer eslabón estuvo representado por la promulgación de la L.O.G.P. en dicho año.

Las causas determinantes de la conflictividad penitenciaria a que me he referido anteriormente son, fundamentalmente dos. La *primera causa es específica* de nuestro país, originada, de un lado, por la discriminación llevada a cabo con los presos comunes al ser excluidos de las amnistías subsiguientes a la muerte de Franco, hecho que necesariamente tenía que producir unos efectos frustrantes en la población reclusa; de otro lado, por el desfase de nuestras leyes penales, a lo que había que añadir la ausencia en nuestro Ordenamiento jurídico de una Ley Penitenciaria, donde estuviesen asentados los principios informadores de la política penitenciaria. Trasfondo de esta situación era la *crisis*, latente desde hacía varios años, de todo el sistema penitenciario español, basado en una absurda *disciplina paramilitar*, que ya había sido denunciada en su tiempo por Salillas con las siguientes palabras: «La aplicación de la disciplina militar a los establecimientos penitenciarios es un desdoro militar y un engendro penitenciario». El *paternalismo* en el que se basaban, en general, las relaciones recluso - funcionario, y en definitiva, el mantenimiento del *principio de autoridad* a toda costa, constituían algunos de los ingredientes en el que se afincaba el viejo sistema penitenciario. Disciplina paramilitar, paternalismo y principio de autoridad que naufragaban con el cambio político acaecido en España sin que fueran sustituidos por otros principios más acordes con la época presente. A ello hay que añadir que el sistema penitenciario venía siendo dirigido y ejecutado durante los últimos treinta años por funcionarios reclutados entre los *ex-combatientes* de la guerra civil («alférezes provisionales»), *guardias de seguridad interior* de las prisiones, procedentes del

período republicano («porristas»), cuya única misión cuando se les incorporó al Cuerpo, era mantener el orden interno, de ahí que el criterio más importante de selección fuese la talla y la envergadura de los mismos, y finalmente, «jubilados» de las Fuerzas Armadas. Estos funcionarios constituían el núcleo principal de la Administración Penitenciaria, eran los más influyentes y dominaban de forma exclusiva y excluyente el Centro Directivo y la mayoría de las direcciones de los centros penitenciarios del país. Hasta finales de los años cincuenta no comienzan a incorporarse, de forma muy lenta, funcionarios ingresados por oposición, con la exigencia de una titulación, diversa, según la escala a la que accedían. Este grupo de funcionarios fue minoritario hasta los años setenta. En consecuencia, el colectivo del funcionariado penitenciario, en general, y con excepciones honrosas, no era el idóneo para aplicar ninguna clase de técnicas criminológicas ni misiones reeducadoras. Su cometido principal había sido hasta el momento el de la mera vigilancia.

La *segunda causa* fundamental del problema penitenciario, que yo llamo *genérica*, tiene su raíz en la *crisis* por la que actualmente atraviesa la pena privativa de libertad en todo el mundo civilizado. Si bien comparto la idea de Muñoz Conde de que la crisis de la pena privativa de libertad es más bien la crisis de su ejecución. Hay que reconocer que las ideas acerca de la readaptación social no han prosperado en el marco penitenciario. La prisión es más un factor criminógeno que un medio de tratamiento del delincuente. Los motines, incendios, suicidios, autolesiones, agresiones y otros procesos análogos, constituyen hoy fenómenos habituales en progresión creciente y alarmante en el medio penitenciario de nuestros días.

No obstante, y a pesar del pesimismo que parece deducirse de las anteriores reflexiones, derivado de la preocupante realidad penitenciaria de nuestro país, es posible, a medio plazo, una salida airosa a la situación actual con una serie de reformas y medidas socialmente adecuadas al momento político español. Para ello debemos de partir de un presupuesto realista: las penas privativas de libertad, pese a la crisis en que se encuentran, son en la actualidad insustituibles para la denominada *gran criminalidad*. Las penas de prisión representan en la actualidad en el mundo el 50% de las penas impuestas, por lo que todavía constituyen la fuente esencial de la justicia penal. Estas afirmaciones no deben de interpretarse en el sentido de que no soy partidario de los *sustitutivos penales* a la pena privativa de libertad, por el contrario, estimo que, a corto plazo, la tarea de la Política Criminal ha de ser la búsqueda de otras medidas más eficaces y acordes con los tiempos presentes, que sustituyan a la pena prisional. Los destinatarios de estos sustitutivos deben ser los componentes de la lla-

mada *pequeña criminalidad*. Creo que en la época en que vivimos, dejando al margen veleidades demagógicas, hay que plantearse de forma decidida la reforma de la actual ejecución de la pena de prisión para que cumpla su finalidad de reeducación y reinserción social. Y aunque haya que reconocer una vez más que la L.O.G.P. de 1979 ha constituido para España un importante avance del moderno penitenciarismo, dada su calidad técnica y jurídica, sin embargo, hay que poner de relieve que la *reforma penal* no se llevó a cabo de forma total en nuestro país. Ni el Código penal ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal respondieron al cambio político que representaba la Constitución de 1978. Los resultados a los que condujo esa desacertada política penal se pusieron de relieve a lo largo de 1981 y 1982, años en los que los establecimientos penitenciarios españoles llegaron a albergar a 23.500 internos, de los cuales más del 50 por ciento eran reclusos en situación de prisión preventiva. La falta de agilidad procesal originó en fechas recientes, de forma generalizada en los establecimientos penitenciarios, una huelga de hambre de los internos en demanda de una reforma penal profunda y rápida. De otro lado, la escasez de funcionarios y de establecimientos carcelarios hace que el problema anterior se agudice, reproduciéndose el *proceso de caotización* en las prisiones españolas durante 1982 y primeros meses de 1983. Las noticias frecuentes de asesinatos en el interior de las prisiones, la pugna entre bandas mafiosas que operan descaradamente dentro de los recintos carcelarios, el tráfico abundante de toda clase de drogas, los abusos deshonestos de carácter homosexual y el significativo aumento del número de suicidios en el medio penitenciario, son motivos más que suficientes para la reflexión. Y de esta reflexión hay que deducir que se han estado incumpliendo de manera flagrante y sistemática en los establecimientos carcelarios los preceptos constitucionales, sobre todo el artículo 25.2, y de la Ley General Penitenciaria, artículo 1, entre otros, que disponen de manera concluyente que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de los condenados. La situación penitenciaria actual exige medidas urgentes y soluciones a los muchos problemas que se han venido acumulando a lo largo de estos dos últimos años, y sobre todo una *aplicación real* de la normativa penitenciaria, para lo que es necesario una mejor infraestructura arquitectónico - penitenciaria, una valiente ampliación de centros penitenciarios de régimen abierto y un incremento considerable de personal penitenciario especializado. Los últimos meses, no obstante, son esperanzadores: la deseada reforma del Código penal de 25 de junio de 1983 y la no menos esperada reforma de los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento criminal de 23 de abril de

este año, han aligerado notablemente la cifra de internos recluidos en los centros penitenciarios, disminuyendo, sobre todo, el número de presos preventivos. Las líneas de una política penitenciaria en el futuro deben además pasar necesariamente por una apertura del mundo penitenciario. Los problemas prisionales deben salir de los recintos prisionales. La actitud, muy frecuente por cierto, de considerar al mundo carcelario como algo cerrado, tenebroso y aparte es equivocada y contribuye de manera decisiva al fracaso penitenciario. Al ser el mundo penitenciario una parte de la estructura social, la sociedad en su totalidad debe conocer, compartir y buscar las soluciones a los problemas penitenciarios planteados en nuestros días.

En otro orden de cosas, como reconoce con acertadas palabras López-Rey, el mundo penitenciario es mucho más complicado, resentido y frustrado que el mundo de clínicas, hospitales y laboratorios, y no menos que el mundo libre en donde la libertad de que se disfruta compensa no poco de lo que se carece, se sufre y lucha en el mundo penitenciario. En este medio hostil, lleno de dificultades y riesgos tiene el funcionario penitenciario que ejercer la misión social que le atribuyen las modernas leyes penitenciarias. La Administración tiene el deber de procurar por todos los medios informar a la opinión pública acerca de la utilidad social, sacrificio y vocación profesional que la profesión penitenciaria lleva consigo. El funcionario penitenciario no es un vengador de la sociedad bajo cuya férula sufre el delincuente, es un agente de resocialización, imprescindible para el logro de la reincorporación de los internos a la libertad en las mejores condiciones posibles.

ORGANOS PENITENCIARIOS COLEGIADOS Y UNIPERSONALES

El R.P. de 1981 dedica su Título IX, con la rúbrica «De los órganos penitenciarios colegiados y unipersonales», distribuido en dos capítulos, a regular, el I, la composición y funciones de los órganos penitenciarios colegiados, y el II, a los órganos unipersonales. Veamos, en primer lugar, los órganos colegiados:

1. Juntas de Régimen y Administración

Las Juntas de Régimen y Administración constituyen un órgano colegiado *decisorio* de notoria importancia en la marcha de los establecimientos penitenciarios. Son el órgano de gobierno principal de cada centro penitenciario, dadas las competencias, que en una serie de materias fun-

damentales, tienen asignadas. Igualmente es de resaltar la labor de coordinación que deben llevar a cabo entre los diversos sectores del establecimiento, unificando, en suma, la aplicación del régimen penitenciario.

En cada centro penitenciario existirá una Junta de Régimen y Administración que tiene como misiones fundamentales: la *uniforme aplicación del régimen penitenciario*, el *buen gobierno de los establecimientos* y la *recta gestión económica* de los mismos.

Composición: *Director*, que actúa de presidente al ser el representante del poder público en el establecimiento penitenciario, de acuerdo con el artículo 276.1 del R.P., integrándose como vocales, él, o los *Subdirectores*, de entre los que actuará como Secretario el Subdirector Jefe de la Oficina de Régimen; el *Administrador*, el *Jefe de Servicios* más antiguo en el puesto, y *dos funcionarios elegidos* por la plantilla cada año (art. 262.1). Esta composición, que podemos llamar ordinaria, de la Junta de Régimen y Administración se puede excepcionalmente complementar, «cuando resulte aconsejable oír la opinión de algún otro funcionario de la plantilla en un asunto concreto sobre el que deba deliberar la Junta», en cuyo supuesto, «podrá ser convocado por el Director a la reunión correspondiente». De igual forma, «cuando se pase al estudio de los temas correspondientes al Economato del establecimiento, será llamado el funcionario encargado del mismo, que participará con voz, pero sin voto» (art. 262.2).

Funciones: Vienen señaladas en el artículo 262, pudiéndose agrupar en los siguientes apartados:

Relacionadas con el régimen penitenciario:

«a) Establecer las *normas de régimen interior* para la regulación y consecución de una convivencia ordenada que permita el cumplimiento de los fines del establecimiento respecto a cada clase de internos».

«b) Organizar la ejecución de las *prestaciones* que hacen referencia a los aspectos *médico-sanitario, religioso, cultural, de relaciones con el mundo exterior, de alimentación y equipo*, y en general de las *asistenciales y tutelares* que los internos precisen en asuntos propios o de sus familias».

«c) Adoptar las medidas que se juzguen necesarias en los casos de *alteración del orden* en el establecimiento, dando cuenta a la Inspección General».

«d) Oír las *peticiones y quejas* que formulen los internos, examinarlas y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes».

«e) Acordar la concesión de *recompensas* a los internos, la imposi-

ción de *correcciones disciplinarias* a los que cometieren faltas reglamentarias, la invalidación de notas en sus expedientes y las propuestas de rehabilitación».

Relacionadas con el tratamiento penitenciario:

«f) *Fomentar y controlar las actividades laborales* de los internos, cuidando que las mismas se desarrollen de conformidad con las normas vigentes».

«g) *Determinar los puestos auxiliares* que requieren las necesidades del establecimiento y *designar* los internos que hayan de desempeñarlos, eligiéndose preferentemente para auxiliares de departamento exteriores o fuera de rastrillo, en primer lugar, a *penados clasificados en tercer grado*, en su defecto a *clasificados en segundo*, y sólo excepcionalmente a internos en situación preventiva, extremándose en estos dos últimos casos las medidas de seguridad que se estimen pertinentes».

«h) *Elevar las propuestas* que, con respecto a los *beneficios penitenciarios*, le están atribuidas».

«i) *Acordar motivadamente la aplicación* del régimen de *departamentos especiales* a los internos en quienes concurren los supuestos o requisitos del artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, así como el *alta* en dicho régimen, y proponer el *traslado* del número de ellos que resulte necesario en caso de obras, motín o inhabilitabilidad total o parcial del establecimiento».

«j) *Acordar la concesión de permisos de salida* a los internos, solicitando la autorización correspondiente al Juez de Vigilancia o al Centro Directivo, según los casos».

Relativas a la participación de los reclusos en la vida prisional:

«k) *Organizar, por unidades de clasificación, los procedimientos de designación* de internos que hayan de *participar* en actividades o responsabilidades de orden educativo, recreativo, religioso, laboral, cultural o deportivo».

Relacionadas con la recta gestión económica de los centros:

«*Intervenir, fiscalizar y, en su caso, aprobar la marcha de los servicios administrativos del establecimiento, la contabilidad general, la formulación*

de presupuestos y la rendición de cuentas».

El artículo 263 concluye con una fórmula analógica, ya que la Junta de Régimen y Administración también decidirá, «en todos los demás asuntos no comprendidos en la enumeración anterior y que afecten al régimen del establecimiento».

Sesiones: Serán *ordinarias* los días 1, 10 y 20 de cada mes, y *extraordinarias*, cuantas veces lo considere necesario el Director-Presidente (art. 265).

De las funciones que tienen asignadas las Juntas de Régimen y Administración de los establecimientos penitenciarios se desprende la *fundamental importancia* que tienen estos órganos colegiados en la vida prisional, y ello a pesar de haber perdido competencias si se comparan con las que poseían en el anterior Reglamento de 1956, por haberse transferido a otros órganos penitenciarios colegiados que son los Equipos de Observación y de Tratamiento.

Precisamente en razón a la trascendencia que tienen estos órganos colegiados para la acertada gestión del centro penitenciario, expresábamos hace años (1976), que en la práctica, la autoridad del Director solía protagonizar y encauzar la mayoría, por no decir todas, las decisiones de la Junta, con lo que de hecho las competencias de la misma revertían en la persona del Director, aumentando su *autoridad*. Las Juntas de Régimen y Administración a consecuencia del *dirigismo* del Director quedaban reducidas a cumplir una misión meramente representativa. De ahí que resultase necesario y urgente *democratizar* el órgano colegiado, exigencia que en mi opinión queda acertadamente conseguida en el R.P. de 1981, al incluir, de un lado, a un Jefe de Servicios que puede servir de portavoz y representante de los servicios interiores del establecimiento, y de otro lado, al insertar a dos funcionarios elegidos democráticamente cada año por la plantilla. Es de esperar que con este importante paso dado en la composición de la Junta de Régimen no se produzcan aquellas situaciones a que antes aludíamos. Sin embargo, y desde otro punto de vista, se observa en la composición de la Junta una omisión, que a mi juicio, considero importante. Se trata de la ausencia del médico y del profesor de enseñanza general básica, piezas esenciales de la vida sanitaria y educativo-cultural, respectivamente, del establecimiento penitenciario.

Conviene precisar, por último, que dada la capacidad técnica de los componentes de los Equipos de Observación y de Tratamiento, en materia de observación, clasificación y tratamiento, los dictámenes, estudios e informes emitidos por éstos deben ser asumidos sin ninguna reserva por la

Junta de Régimen y Administración. Los Equipos de Observación y de Tratamiento son, y así deben de actuar, auténticos asesores científicos de las Juntas de Régimen y Administración en materias de su especialidad. Abundando en esta idea, tanto la L.O.G.P. don el R.P. (arts. 71 y 249, respectivamente), al elevar el tratamiento a la categoría de principio fundamental, que se dirige a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados, proclama el *principio de subordinación* del régimen de los establecimientos al tratamiento penitenciario, lo que de ningún modo puede interpretarse como un abandono del orden y la disciplina en los centros penitenciarios. De ahí que ambos textos legales encomienden al Director del establecimiento, sentado aquel principio, la debida *coordinación* entre las actividades regimentales y de tratamiento.

2. *Organos de tratamiento*

La clasificación de los condenados a penas privativas de libertad constituye una de las finalidades más perseguidas por los modernos sistemas penitenciarios. Una adecuada clasificación de los internos es condición *sine qua non* de la individualización penal. Clasificación e individualización que no es posible conseguir sin la observación científica del interno. La observación, en definitiva, es el punto de arranque del tratamiento penitenciario.

En nuestro país podemos citar como antecedentes de la observación científico, en *primer lugar*, el *gabinete psicológico* creado en 1965 en la Prisión Provisional de hombres de Madrid, dedicado básicamente a la orientación profesional y adaptación laboral de los jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 21 años. La dirección del centro recayó en Alarcón, funcionario del cuerpo especial y Psicólogo, a quien esencialmente se debía la creación del gabinete. Este organismo contribuyó de forma decisiva a que penetrasen en nuestro país las modernas técnicas de investigación criminológica que en toda Europa se venían practicando desde los años cincuenta. Con ello, el anquilosado sistema penitenciario español iba a comenzar un lento proceso de apertura y revitalización. El *segundo antecedente* se produce en España con motivo de la importante reforma del Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956, realizada en virtud del Decreto de 25 de enero de 1968. Es el momento en el que hacen su aparición unos equipos de especialistas que tendrían como misión fundamental la observación de la personalidad de los internos, la clasificación, de acuerdo con criterios criminológicos y penitenciarios y la propuesta de destino al centro correspondiente. No obstante, la labor de estos equipos,

durante los primeros años fue muy irregular, y en general empírica, ya que al no existir los técnicos suficientes se recurrió a una composición provisional, hasta que fue creado el Cuerpo Técnico en 1970.

En la actualidad podemos decir que tanto la L.O.G.P. como el R.P. *reafirman y potencian* la observación científica en los centros penitenciarios a través de los equipos de especialistas. Ambos textos legales disponen que, «la tareas de observación, clasificación y tratamiento las realizarán los equipos cualificados de especialistas...», contando para tal misión, «con la colaboración del número de educadores necesarios, dadas las peculiaridades de los grupos de internos tratados» (arts. 69.1 de la L.O.G.P. y 247.1 del R.P.). Los equipos a que se alude, órganos colegiados penitenciarios, de acuerdo con el R.P., son los de *observación*, para los centros de preventivos, y de *tratamiento*, para los establecimientos de cumplimiento y especiales, cuyo estudio haremos diferenciadamente.

A) *Equipos de Observación*

a) *Composición.* Los equipos de Observación tienen su campo de actuación en los establecimientos de preventivos, estando integrados, de acuerdo con el artículo 266/1 del R.P., por un Jurista-Criminólogo y un Psicólogo, funcionarios del Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, y por un Asistente Social, pudiéndose ampliar la composición del mismo con un Psiquiatra, en aquellos centros en los que el contingente de internos lo aconseje. El Equipo de Observación contará también con el auxilio de uno o varios Educadores.

El Subdirector-Jefe del Equipo, que será preferentemente uno de los funcionarios del Cuerpo Técnico integrantes del mismo será quien lo presida, actuando bajo la supervisión y dependencia inmediata del Director del centro penitenciario, quien presidirá las sesiones del Equipo cuando asista a ellas siendo en todo caso preceptiva dicha asistencia siempre que hayan de tomarse acuerdos sobre propuestas razonadas de clasificación o libertad condicional (artículo 266/3, R.P.).

Aunque la observación científica es misión esencial de los miembros del Equipo, sin embargo, los demás funcionarios del centro penitenciario, sobre todo, los que diariamente conviven con los internos, están en condiciones de aportar cuantos datos e informes tengan de los internos observados, por ello, «el Subdirector Jefe del Equipo recabará de los funcionarios de la plantilla, y éstos aportarán cuantos conocimientos o datos obtengan sobre los internos observados». Siendo, en todo caso, preceptivos,

«los informes del médico, de los Jefes de Servicios, de los Jefes de Departamento al que esté asignado el interno, así como del profesor de Educación General Básica si el observado asiste a la Escuela, y del Maestro de Taller en que aquél trabaje o del Jefe de Dependencia en que realice alguna actividad laboral» (artículo 266/4, R.P.).

b) *Funciones.* Los Equipos de Observación realizarán las siguientes funciones, de acuerdo con el artículo 267 del R.P.:

1.^a) *Clasificación.* Habida cuenta del principio de presunción de inocencia que debe presidir el régimen penitenciario de los internos preventivos (arts. 5 y 64/1 de la L.O.G.P.), la observación científica de estos internos se limitará a «recoger la mayor información posible sobre cada interno a través de datos documentales, de entrevistas con el observado, con sus familiares y otras personas que le conozcan, y mediante la observación del comportamiento», todo ello con el objeto de establecer sobre dicha base, «la separación o clasificación interior en los grupos a que hace referencia el artículo 33» (artículo 267/1.^a, R.P.). El artículo 33 del R.P. establece los criterios de clasificación de los detenidos y presos, en el interior de los Establecimientos: sexo, personalidad, edad, antecedentes y estado físico y mental.

En este punto es necesario poner de relieve que el artículo 16 de la L.O.G.P. prevé la posibilidad de que los hombres y las mujeres, en supuestos excepcionales, puedan compartir el mismo establecimiento penitenciario, colocándose en una posición avanzada al admitir las modernas experiencias efectuadas en otros países de las denominadas *prisiones mixtas*. El R.P. que tendría que haber desarrollado tal disposición legal, ha hecho caso omiso de la misma, impidiendo en el artículo 33 toda posibilidad práctica de ensayar en nuestro país la prisión mixta. Su implantación, siquiera experimental, en algunos centros de cumplimiento de régimen abierto, donde las instalaciones fuesen adecuadas, hubiese sido, en mi opinión, un acierto. Nos encontramos ante uno de los supuestos en donde claramente se percibe que el R.P. ha recortado sensiblemente los efectos positivos del articulado de la L.O.G.P.

2.^a) *Estudio científico de la personalidad.* Una vez recaída sentencia condenatoria se completa la información anterior con un estudio científico de la personalidad del observado, formulando, en base a dichos estudios e informaciones, «una determinación del tipo criminológico, un diagnóstico de capacidad criminal y de adaptabilidad social, y la propuesta razonada de grado de tratamiento y de destino al tipo de Establecimiento que corresponda, que remitirán al Centro Directivo» (artículo 267/2.^a, R.P.). En

general, el esquema de la personalidad criminal de Pinatel es el sistema de trabajo que siguen los Equipos de Observación españoles, siendo el jurista-criminólogo el que realiza la tarea final de síntesis sobre los resultados que cada especialista proporciona de su examen previo del interno. De esta reunión final se concluye un pronóstico acerca del comportamiento del sujeto, y se esbozan las líneas que deberá seguir el tratamiento para evitar en el futuro comportamientos antisociales.

3.^a) *Informar los casos de aplicación de régimen cerrado y los permisos de salida.* En concordancia con los artículos 10 de la L.O.G.P., 34 y 43 del R.P. los Equipos de Observación informarán «los casos de aplicación del artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria...». Igualmente realizarán el informe de «los permisos de salida cuya concesión pueda acordar la Junta de Régimen y Administración del Establecimiento» (artículo 267/3.^a, R.P.).

4.^a) *Suministrar estudios de personalidad a Jueces y Tribunales.* Estamos ante una de las más importantes novedades de la legislación penitenciaria, ya que el «atender los requerimientos de los Tribunales, Jueces y miembros del Ministerio Fiscal, en orden a los exámenes de personalidad de los acusados, previos a la sentencia», puede significar la entrada de los estudios criminológicos de personalidad en el proceso penal con toda la carga positiva que ello puede representar a fin de que el juzgador tenga un mayor conocimiento de la personalidad del inculcado, dictando una sentencia más justa. No obstante, la medida legislativa penitenciaria resulta incompleta y no puede surtir todos sus efectos hasta tanto se introduzca en el proceso penal una fase de estudio criminológico del imputado, como anunciaba la *exposición de motivos* del Proyecto de Ley General Penitenciaria, al objeto de «...facilitar el juicio de culpabilidad y la determinación de la pena por el juzgador...». Del mismo modo los Equipos de Observación realizarán, «los estudios que hayan de remitirse al Juez de Vigilancia» (artículo 267/4.^a, R.P.). Dadas las facultades que el artículo 76/2 de la L.O.G.P. concede al Juez de Vigilancia en el campo de la ejecución penal los informes de los equipos técnicos penitenciarios pueden ser decisivos para que el Juez de Vigilancia pueda pronunciarse con un mayor conocimiento de la realidad penitenciaria, y por ende, de los internos reclusos en los centros penitenciarios.

5.^a) En el supuesto de que en el centro de preventivos donde actúe el Equipo de Observación haya penados, bien porque de acuerdo con el artículo 23 del R.P. les queden menos de seis meses de internamiento efectivo, o por otras razones, «los Equipos de Observación realizarán las funciones propias de los Equipos de Tratamiento...» (artículo 267/5.^a, R.P.).

B) *Equipos de Tratamiento*

a) *Composición.* Los Equipos de Tratamiento ejercerán sus funciones en los centros de cumplimiento de penas y en los especiales, estando compuestos por un Jurista-Criminólogo, un Psicólogo y un Asistente Social. A estos miembros se unirá un Pedagogo en los centros de jóvenes y en los de régimen ordinario. También se adscribirán al Equipo los Educadores que sean necesarios, agrupándose los internos para recibir el tratamiento en grupos de veinte a cuarenta, según las características de los internos, en torno a un Educador (artículo 269/1, R.P.). En los centros especiales de Psicópatas y Sanatorio Psiquiátrico, se ampliará el Equipo con el número de Psiquiatras que se considere necesario. En los de Deficientes mentales se integrarán en el Equipo los Psiquiatras y Pedagogos que se juzgue necesario (artículo 269/3, R.P.).

Al igual que los Equipos de Observación, los de Tratamiento estarán presididos por el Subdirector-Jefe del Equipo, que será preferentemente uno de los funcionarios del Cuerpo Técnico integrantes del mismo, actuando bajo la supervisión y dependencia inmediata del Director del centro penitenciario, que presidirá las reuniones del Equipo cuando asista a las mismas, siendo preceptiva esta asistencia siempre que hayan de tomarse acuerdos sobre programación de cada tratamiento individual, asignación inicial, progresión o regresión de grado e iniciaciones o elevaciones de libertad condicional (artículo 269/4, R.P.).

También aquí son importantes los informes y la colaboración de todos los funcionarios del establecimiento penitenciario en la ejecución de las tareas de tratamiento, siendo en todo caso preceptivos los informes del Médico, de los Jefes de Servicios, de los Jefes del Departamento a que esté asignado el interno, así como del Profesor de Enseñanza General Básica si aquél asiste a la Escuela, y del Maestro de Taller en que aquél trabaje o del Jefe de la dependencia en que realice alguna actividad laboral (artículo 269/5/6, R.P.).

1.ª) *Estudio del Protocolo.* El Protocolo del interno, confeccionado por el Equipo de Observación, es remitido al centro de cumplimiento donde el penado es destinado para extinguir condena, debiendo ser estudiado detenidamente por los miembros del Equipo de Tratamiento, «... y, tras las entrevistas, pruebas e informaciones complementarias que juzgue

b) *Funciones.* Los Equipos de Tratamiento tendrán las funciones siguientes, de acuerdo con el artículo 270 del R.P.:

necesarias, confirmar o modificar el diagnóstico de personalidad criminal y emitir un pronóstico inicial» (art. 270/1.^a).

2.^a) *Decidir el programa global de tratamiento.* Una vez realizado el estudio del Protocolo, el Equipo de Tratamiento decide, «el programa global de tratamiento de cada interno, especificando los métodos o técnicas a emplear, atendiendo no sólo a las peculiaridades de su personalidad, sino también al tiempo aproximado de duración de sus condenas» (art. 270/2.^a), remitiéndose a la Sección de Tratamiento del Centro Directivo, «copia de los programas individuales de tratamiento de cada interno... de los establecimientos de cumplimiento. En los establecimientos especiales se remitirá copia del estudio de personalidad inicial y del programa individual de tratamiento» (art. 271).

3.^a) *Controlar la evolución del tratamiento.* Una vez iniciada la ejecución de los métodos de tratamiento y distribuidos entre los miembros del Equipo, de acuerdo con las técnicas propias de su especialidad, deberán, «controlar la evolución de los mismos con la frecuencia que cada caso requiera» (art. 270/3.^a). «Los Equipos de todos los establecimientos remitirán también cada seis meses informe de la evolución del tratamiento y de lo realmente realizado del programa antedicho; cuando el período de cumplimiento de condena sea superior a seis años de prisión efectiva, el informe anterior será anual» (art. 271).

4.^a) *Asignar a cada interno, grupo, subgrupo y Educador.* De acuerdo con las características de la personalidad de cada interno y del programa de tratamiento señalado se asigna al interno a un grupo, dentro de él a un subgrupo, «quedando aquél bajo el control de su Educador, que irá reuniendo el mayor número de datos posibles sobre el mismo por observación directa de su comportamiento y colaborará en la realización de los métodos correspondientes, bajo la dirección y orientación de los miembros del Equipo» (art. 270/4.^a).

5.^a) *Acordar la progresión o regresión de los grados de tratamiento.* Una de las funciones de los Equipos de Tratamiento que se pueden considerar más importantes es la progresión o regresión del grado de tratamiento de los penados, «así como las calificaciones de conducta global, proponiendo al Centro Directivo, en su caso, el traslado al establecimiento que corresponda». Igualmente podrá proponer, con el oportuno informe, el traslado de los penados, «sin cambio de grado por necesidades o conveniencias del tratamiento...» (art. 270/5.^a).

6.^a) *Informar los expedientes de libertad condicional.* La misión más trascendental que cumplen los Equipos de Tratamiento es, sin ninguna

duda, «realizar los informes necesarios para el otorgamiento de la libertad condicional...». Según afirma Middendorff, la investigación norteamericana sobre la prognosis se ha desarrollado partiendo del instituto jurídico de la libertad condicional (*parole*). La especial estructura del sistema jurídico penal norteamericano, donde desempeña un gran papel la pena indeterminada en la que se fijan tan sólo el mínimo y el máximo, incitó a esta clase de investigaciones, porque el centro de gravedad del proceso penal en conjunto radica en si un penado podría ser puesto en libertad en un determinado momento, supuesto que pudiera establecerse una prognosis de su conducta posterior.

7.^a) *Informar los casos de aplicación de régimen cerrado y los permisos de salida.* Esta función de «informar los casos de aplicación del artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y los permisos de salida...» (art. 270/7.^a), es coincidente con la asignada a los Equipos de Observación en los centros de preventivos, estando en estrecha relación con la evolución del tratamiento.

8.^a) *Proporcionar estudios de personalidad a Jueces y Tribunales.* También los Equipos de Tratamiento pueden realizar una labor de colaboración con las autoridades judiciales, «en orden a los exámenes de personalidad de los acusados, previos a la sentencia, y realizar los estudios que hayan de remitirse al Juez de Vigilancia» (art. 270/8.^a).

9.^a) Finalmente, el Equipo de Tratamiento actuará como Equipo de Observación, «respecto a la internos preventivos que, en departamentos independientes, pudiera haber en algún centro de cumplimiento». Y en el supuesto, que entendemos debe ser excepcional, de establecimientos penitenciarios que carezcan de Equipos de Observación y de Tratamiento, «las funciones asignadas a los mismos corresponderán a las Juntas de Régimen y Administración» (art. 272).

3. Normas comunes a los Equipos de Observación y de Tratamiento

Dispone el R.P. en el artículo 273 que los Equipos de Observación y de Tratamiento realizarán, además de las enumeradas en los apartados anteriores, las funciones siguientes:

1.^a) *Facilitar ayuda moral y protección tutelar.* «Facilitar a los reclusos, por medio de los Asistentes Sociales integrantes del Equipo, la ayuda moral y tutela que precisen en asuntos propios o referentes a su familia».

2.^a) *Oír las peticiones y quejas.* «Oír las peticiones y quejas que formulen los internos respecto a su clasificación y tratamiento y adoptar los

acuerdos que estimen pertinentes sobre las mismas, sin perjuicio de las funciones del Juez de Vigilancia».

3.^a) *Informar los recursos.* «Informar los recursos que se presenten contra los acuerdos del Equipo, así como las instancias y solicitudes que los internos, en uso del derecho que se les reconoce en el artículo 134, dirijan a las autoridades, siendo preceptivo en estos casos el informe del Jurista-Criminólogo».

4.^a) *Suspender o aplazar las sanciones disciplinarias.* «Sugerir a la Junta de Régimen y Administración la suspensión o aplazamiento de las correcciones disciplinarias que puedan perturbar el tratamiento o el estudio de la personalidad, así como la reducción de los plazos de invalidación de las faltas cuando existan fundados motivos para pensar que esta medida puede influir favorablemente en el tratamiento».

5.^a) *Proporcionar información a los Jefes de Servicios sobre los exámenes de Personalidad.* «Proporcionar a los Jefes de Servicios, a través de la Dirección del Centro, cuantos resultados del examen de personalidad de los internos pueden ser orientadores o de interés para el trato de cada uno de éstos y, en general, para el mantenimiento del orden y la disciplina».

6.^a) *Facilitar a los maestros del establecimiento las valoraciones de aptitudes mentales.* «Comunicar, a solicitud de los Profesores de Educación General Básica, las valoraciones de aptitudes mentales de los internos que realicen cursos en la Escuela, así como otras informaciones contenidas en el Protocolo que puedan serles útiles en la programación y ejecución de las tareas escolares».

7.^a) *Realizar tareas de orientación y selección profesional.* «Si existen en el Centro Talleres o Escuelas de Formación Profesional, realizar las tareas de orientación y selección profesional, el asesoramiento pedagógico o psicológico de la formación profesional, así como intentar, mediante las técnicas adecuadas, la integración personal y colectiva de los internos en el trabajo y en la organización laboral».

8.^a) *Elaborar el Protocolo del interno.* «Formar el protocolo correspondiente a cada interno, incorporando al mismo las informaciones y documentos a que se refieren los diversos apartados de este artículo».

9.^a) «Decidir en todos los asuntos, no comprendidos en la enumeración anterior y en los artículos 267 y 270, que les competan reglamentariamente y afecten a la observación, clasificación y tratamiento de los internos».

Los equipos de Observación y de Tratamiento deberán celebrar «una sesión semanal ordinaria, presidida por el Director del Establecimiento», así como las extraordinarias, «que considere necesario el Director-Presidente», «además de cuantas reuniones informales de trabajo juzguen procedentes». En el transcurso de estas reuniones en las que «cada miembro del Equipo aportará los informes y propuestas de su especialidad respecto a los internos considerados en cada sesión», se tomarán los siguientes acuerdos: «de clasificación inicial, progresión y regresión de grado y los de programas individuales de tratamiento, así como los informes de evolución semestral o anual de tratamiento, los de aplicación del artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, y los relativos a beneficios penitenciarios y permisos de salida» (art. 274).

En cuanto al resto de normas comunes de actuación de estos órganos colegiados vienen recogidas en el artículo 275 del R.P. que sintetizamos: Los avisos de convocatoria de las sesiones *ordinarias* se consignarán con dos días de antelación y los de las *extraordinarias* se convocarán con la antelación debida, haciendo constancia en unas y otras convocatorias los asuntos a tratar, siendo la asistencia de los miembros a las sesiones obligatoria. Los vocales de los Equipos podrán hacer sus propuestas de palabra o por escrito, siendo los acuerdos tomados por mayoría absoluta de asistentes, dirimiendo los empates el voto del Presidente. De todas las sesiones se levantará la correspondiente *acta*, firmada por los asistentes, haciendo constar los acuerdos adoptados y los votos particulares emitidos. Serán de aplicación supletoria los artículos 9 a 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo sobre actuación de órganos colegiados.

La implantación en España de los Equipos de Observación y de Tratamiento, pese a no estar definitivamente establecidos en todos los centros penitenciarios, ha supuesto un avance técnico acorde con el momento criminológico mundial, del que sólo consecuencias positivas pueden derivarse. Y aunque actualmente el fruto del trabajo de estos Equipos tenga una *limitación penitenciaria*, esperemos no tarde mucho en reconocerse su utilidad, para el momento del juicio oral, con lo que se aportarían datos tal vez trascendentes para el juzgador a la hora dictar sentencia, y naturalmente, para una genérica y eficaz política criminal y criminológica. En este sentido, debe propugnarse la colaboración, sin merma de su distinta e independiente función, con los Institutos universitarios de Criminología. Como afirma Seelig, con un examen biológico-criminal del inculcado, se consiguen la mayoría de las veces, las bases más importantes para una adecuada determinación de la pena.

C) *La Central Penitenciaria de Observación*

Aunque el R.P. regule esta materia en el título IV, relativa al tratamiento, sin embargo, la naturaleza de este organismo, en mi opinión, es clara, se trata de un órgano colegiado penitenciario, más cualificado y con competencias más amplias y generales, pero en definitiva, un órgano colegiado más, que desenvuelve su actividad en el ámbito penitenciario nacional.

El artículo 70 de la L.O.G.P., con idéntico texto que el artículo 248 del R.P., establece los objetivos y finalidad de la Central Penitenciaria de Observación en los siguientes términos:

- «1. Para el debido asesoramiento en materia de observación, clasificación y tratamiento de los internos, existirá una Central Penitenciaria de Observación, donde actuará un equipo técnico de especialistas con los fines siguientes:
 - a) Completar la labor de los Equipos de Observación y de Tratamiento en sus tareas específicas.
 - b) Resolver las dudas y consultas de carácter técnico que se formulen por el Centro Directivo.
 - c) Realizar una labor de investigación criminológica.
 - d) Participar en las tareas docentes de la Escuela de Estudios Penitenciarios.
2. Por dicha central pasarán los internos cuya clasificación resulte difícil o dudosa para los equipos de los establecimientos o de los grupos o tipos de aquéllos cuyas peculiaridades convenga investigar a juicio del Centro Directivo».

La Central Penitenciaria de Observación había sido creada mediante una Orden del Ministerio de Justicia de 22 de septiembre de 1967, «ante la importancia de la observación como base para la separación de los internos dentro del propio establecimiento y a los fines ulteriores de su clasificación y destino al establecimiento de cumplimiento que resulte más idóneo en orden a su tratamiento, una vez que recaiga sentencia firme», para lo cual se iría proveyendo a los establecimientos de unos equipos técnicos que realizarían tal función observadora, creando «un órgano central para completar la labor en materia de observación respecto a aquellos internos en que dicha observación y clasificación entrañe dificultades para los equipos, y al propio tiempo coordine, oriente e impulse el funcionamiento de éstos».

La reforma de 25 de enero de 1968 incorporó al Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956 un nuevo artículo, el 52, donde quedaban establecidas las funciones que tenía asignada la Central de Observación. Inaugurada el 8 de noviembre de 1967 dentro del complejo penitenciario de Carabanchel, está situada en una de las alas del edificio del establecimiento de preventivos de hombres de Madrid, pero con autonomía completa en sus servicios. Las instalaciones son modernas y funcionales, y su puesta en funcionamiento representó para nuestro país la adopción en el campo penitenciario de los métodos de la Clínica Criminológica ya en marcha hace años en otros centros similares europeos: Fresnes (Francia), Rebibbia (Italia) y Saint Guilles (Bélgica).

La Central Penitenciaria de Observación, órgano central asesor de la observación científica en nuestro país, está compuesta del siguiente equipo de especialistas, pertenecientes al Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias: Jurista-Criminólogo, Psicólogo, Psiquiatra, Endocrinólogo, Sociólogo y Pedagogo, contando además con la colaboración de Asistentes Sociales y Educadores, en número suficiente para desarrollar las misiones que se les encomienden.

La legislación penitenciaria actual ha ampliado considerablemente, afirmamos con García Valdés, la importante labor desarrollada por la actual Central de Observación, ya que además, el apartado 2 permite realizar en ella un tratamiento de los reclusos cuyas peculiaridades lo pueden hacer aconsejable; no finalizando, pues, su tarea científica en la adecuada observación y correcta clasificación de los que por ella pasen, sino que puede abarcar ahora el tratamiento de cualquier penado que se juzgue conveniente. También se puede reputar como una novedad en la nueva legislación penitenciaria el que además de las funciones específicas que tiene encomendadas la Central de Observación se le asigne en el artículo 65/4 de la L.O.G.P. la función de *reclasificación* cuando un interno que haya sido por segunda vez clasificado en primer grado por el Equipo correspondiente, lo solicite.

Acerca del esquema de trabajo que en ella se lleva a cabo, la propia Central publicó en 1970, después de los tres primeros años de funcionamiento, un volumen colectivo de gran interés y permanente actualidad.

Del máximo interés, subrayamos una vez más, sería la colaboración, en este caso indudablemente muy fructífera, entre la Central Penitenciaria de Observación y los Institutos universitarios de Criminología. Sus funciones son indudablemente *complementarias*. Sólo en la medida que dicha colaboración se consolide y coordine, podrá empezar una nueva etapa o, al

menos, se habrán fijado los cimientos, para una actividad *penitenciaria y criminológica*, cabal y completa, en España. Según tengo entendido, el Instituto universitario de Criminología de Madrid, ha dado pasos encaminados hacia esa mutua y necesaria colaboración. Es de esperar que la *evidencia*, al fin, se imponga.

Teniendo en cuenta la importancia que la observación científica ha ido adquiriendo en los últimos años y como medio de agilizar y distribuir razonablemente el trabajo de los equipos de especialistas, mi propuesta sería, siguiendo el modelo francés, mantener una Central de Observación, única para todo el Estado, creando *centros regionales* médico-psicológicos, en cada área territorial, coincidentes con el mapa autonómico español. Lo que sin duda daría mayor fluidez a los estudios de personalidad y agilizaría las propuestas de difícil o dudosa elaboración, al tiempo que asesoraría y supervisaría la labor de los Equipos del entorno territorial.

LA PARTICIPACION DEL RECLUSO EN LA VIDA PRISIONAL

Los estudios sociológicos realizados en el medio penitenciario han puesto de relieve la *artificialidad* de la vida prisional, que difiere grandemente del mundo exterior, consecuencia inmediata de la privación de libertad, del trabajo o del sistema de clasificación, que agrupa comunidades de hombres, mujeres o jóvenes, reunidos con arreglo a unos criterios que no aparecen de una manera tan acusada en la vida extramuros. Ante estas condiciones de vida y después de un período continuado de internamiento, el recluso se ve sometido a lo que algunos autores llaman *proceso de privación* o pérdida de sus defensas psicológicas, gracias a un castigo espiritual al que se ve permanentemente sometido. Una de las soluciones ideadas para mejorar ese ambiente prisional, frenando la privación, es la participación del recluso en la gestión de los centros penitenciarios.

Por medio de los cauces representativos el interno se va responsabilizando de forma progresiva de la marcha del establecimiento penitenciario, reduciéndose las diferencias que existen entre la vida en prisión y la vida libre, en cuanto éstas contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso. En definitiva, la participación voluntaria del interno en las actividades del establecimiento mejoran el proceso formativo del recluso haciendo que éste adquiera o conserve hábitos de iniciativa y responsabilidad, lo que sin duda facilitará su resocialización.

La participación de los internos en determinadas actividades de la vida prisional constituye una de las novedades más importantes introducidas en el Ordenamiento jurídico español por la Ley General Penitenciaria. El artículo 24 establece y estimula, en la forma que *reglamentariamente* se señale, «sistemas de participación de los internos en actividades o responsabilidades de orden educativo, recreativo, religioso, laboral, cultural o deportivo». Esta participación se extiende al «desenvolvimiento de los servicios alimenticios y confección de racionados...» y al «control de calidad y precios de los productos vendidos en el centro». El artículo 31.2 de la Ley se refiere a la «participación de los internos en la organización y planificación del trabajo», y el 61.1 a la participación «en la planificación y ejecución de su tratamiento».

Estamos ante lo que algún sector doctrinal denomina *cogestión*, es decir, la participación de los internos en la gestión de los distintos servicios del establecimiento penitenciario. Este régimen de cogestión así establecido no debe entenderse en opinión de García Valdés, en ningún caso, como autogestión por parte de los reclusos que pretenden imponer su sólo deseo y criterio en el interior de los establecimientos, pues la responsabilidad de dirigir los mismos corresponde, con exclusividad, a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Una cosa es participar en la gestión y otra muy diferente, y no autoriza legalmente, es tratar de cometer excesos injustificables suplantando la misión social atribuida al personal de prisiones.

La manera efectiva de participar los internos en determinados actividades o responsabilidades del establecimiento, según dispone la L.O.G.P., viene regulada en diversos preceptos del R.P., y esencialmente, en el capítulo XI, del título II, que lleva una expresiva rúbrica: *Participación de los internos en las actividades de los Establecimientos*. «La participación de los internos en las actividades o responsabilidades de orden educativo, recreativo, religioso, laboral, cultural o deportivo tiene como finalidad inculcar en los mismos sentimientos de solidaridad que les hagan considerarse miembros activos de la sociedad, descartando toda idea de marginación» (art. 135, R.P.). La participación de los internos en las actividades antes señaladas se podrán llevar a cabo en los establecimientos de cumplimiento de régimen abierto, de régimen ordinario y en los de preventivos. Quedan, por tanto, excluidos *reglamentariamente* del régimen participativo los internos de los establecimientos de *régimen cerrado* y *especiales*. En relación a los establecimientos de régimen cerrado, estimo con Mapelli Caffarena, que precisamente en estos centros de cumplimiento es donde se hace más necesaria la participación de los internos por ser más intensa

la vida en comunidad. No obstante, teniendo en cuenta la propia naturaleza que a estos centros asigna el artículo 10.3 de la L.O.G.P. «... limitación de actividades en común de los internos...», debe de admitirse un sistema de *participación limitada*, acorde con las características del centro penitenciario respectivo. Solución análoga adopta el art. 36 de la Ley Penitenciaria sueca de 1974 al permitir que el interno sometido a aislamiento, por razones de régimen interno, pueda tomar parte en las consultas y reuniones sobre la marcha y funcionamiento del centro, siempre que no se opongan a ello razones suficientes. Tampoco veo razones que justifiquen la ausencia total de participación de los internos en centros especiales. Estimo que la regla general debe ser la admisión de la participación de los internos en la vida de estos centros, si bien debiendo adaptarse los cauces participativos a las peculiaridades asistenciales de cada centro.

Las *normas generales* que regulan la participación están recogidas en los artículos 136 y 137 del R.P., y son las siguientes:

1. Se constituirán tres comisiones: *programación y desarrollo de las actividades educativas, culturales y religiosas, actividades recreativas y deportivas y actividades laborales*, estando compuesta cada una de ellas por tres internos, al menos.

2. Cada seis meses se llevará a cabo la elección de los internos que hayan de integrar las comisiones, pudiendo elegir y ser elegidos todos los internos del centro, excepto aquellos que tengan antecedentes disciplinarios sin cancelar.

3. La mesa que reciba los votos estará compuesta por el interno de más edad y el más joven, presidida por un Educador, en los centros de régimen abierto, o el funcionario de la unidad en los ordinarios y de preventivos, procediéndose una vez realizada la votación a la redacción de la oportuna acta y proclamación de candidatos.

4. La participación de los internos en las actividades de los establecimientos se puede dejar sin efecto por las Juntas de Régimen y Administración, bien por alteración del orden o por irregularidades en la elección.

5. Los internos que forman las comisiones elevarán las propuestas o sugerencias a los funcionarios encargados de las actividades mencionadas anteriormente, tomando parte en la programación y ejecución de las mismas, de acuerdo con las normas de régimen interior del establecimiento.

En otros lugares del R.P. también encontramos desarrollados algunos aspectos de la participación de los internos, como en el ámbito de la *promoción cultural*, organizando «cursillos monográficos en función de las

aficiones y preferencias de los internos, que participarán en la programación y selección de contenidos...» (art. 174), en el *campo laboral*, participando, entre otros, en «la organización y planificación del trabajo...», «en la confección de los escandallos que determinen las remuneraciones por los trabajos que se programen» o «formando parte del Consejo Rector y de la Dirección o Gerencia de las cooperativas que se constituyan...» (arts. 202 y 203); en los servicios de *alimentación*, participando, tanto en su desenvolvimiento como en la «confección de racionados...» (art. 223). Finalmente, los internos participarán «en la planificación y ejecución de su *tratamiento*...» (art. 239.1).

A la vista del texto legal conviene ahora hacer una serie de precisiones:

- *Participación en el ámbito laboral*

Los artículos 202 y 203 del R.P. desarrollan ampliamente, en mi opinión, la participación de los internos en la organización y planificación del trabajo, ya que ésta comprende, desde la información acerca de la situación económica y funcionamiento del sector laboral penitenciario, hasta el balance laboral demostrativo de los resultados económicos que se alcanzan en los talleres, pasando por la confección de escandallos que determinan las remuneraciones por los trabajos realizados. En el mismo sentido, la participación de los internos se concreta en la aportación de ideas, planes de trabajo, análisis de sistemas de producción, control y mantenimiento de sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, etc. Del articulado anterior se desprenden unas cotas de participación de los internos en el sector laboral penitenciario que parecen suficientes y adecuadas.

- *Participación en el tratamiento*

En este ámbito de la participación, tanto la Ley como el R.P. (arts. 61.1 y 239.1, respectivamente), coinciden en proclamar la necesidad de fomentar la participación de los internos en la planificación y ejecución de su tratamiento, para conseguir, en definitiva, su colaboración. Principios que van acompañados de la garantía de que no tendrá consecuencias disciplinarias ni regimentales para el interno, el rechazo o la no colaboración a su propio tratamiento (art. 239.3). Pero el aspecto tal vez más interesante de toda esta cuestión es la *corresponsabilidad* del interno en la labor de tratamiento, así como el derecho a tener conocimiento de los resultados de la exploración de cada especialista, de acuerdo con el art. 239.4. A estos

principios, en mi opinión acertados, solamente añadiría, para el logro y afirmación de esa corresponsabilidad del interno en su tratamiento, a que antes aludíamos, el que previamente a la ejecución de las técnicas precisas, se discutiese con él la programación de su tratamiento.

- *Establecimientos de régimen abierto*

Teniendo en cuenta que descansan en la *plena confianza merecida del interno*, debe resultar *potenciada* su participación en la gestión de los centros, como así se desprende, no sólo de la naturaleza de estas instituciones, sino del propio R.P. que en su artículo 45.5.^a en relación con el artículo 136.1.^a, agiliza las normas de participación.

- *Establecimientos de jóvenes*

Caracterizados por una *acción educativa intensa*, las normas de participación en la organización de los centros penitenciarios debe de potenciarse, sobre todo *corresponsabilizando* a los internos en su propio tratamiento. Se trata, en definitiva, de que aprendan a ser responsables como presupuesto básico de su propia resocialización.

En conclusión, se puede afirmar que la participación de los reclusos en el Ordenamiento penitenciario español, se puede mejorar técnicamente, teniendo en cuenta, sobre todo, la ley de ejecución de penas alemana de 1976 y la ley Penitenciaria Sueca de 1974, debiendo distinguirse en nuestro país la L.O.G.P., que parece apropiada y suficiente, y el R.P. que al ser más restrictivo recorta algunos de los efectos de aquélla. Sin embargo, estimo que en este campo más que una reforma de los textos legales se hace necesario que en la práctica no resulten disminuidos o ignorados los cauces de participación en los centros penitenciarios. Una interpretación generosa y adecuada en cada centro puede contribuir a reforzar la participación efectiva del recluso, mejorando la convivencia e influyendo positivamente en el proceso formativo de su personalidad.

Dentro de la *libertad de actuación* del recluso, referida tanto a que pueda seguir las actuaciones que tuviese pendientes al ingresar, como a su participación en el medio penitenciario (arts. 3 (2) (3) y 24 de la L.O.G.P.), creo que puede hablarse de una *libertad o derecho* de asociación de los reclusos. Durante el debate parlamentario de la L.O.G.P. una enmienda del Grupo Parlamentario Comunista propuso que los internos pudieran asociarse para la defensa de sus derechos. La enmienda no prosperó porque se argumentó, estimo que fundadamente, que la defensa de los derechos

de los internos queda garantizada por el reconocimiento en la Ley del estatuto jurídico del interno, la participación de los mismos en la vida penitenciaria, un sistema de recursos y la introducción de una figura tuitiva cual es el Juez de Vigilancia.

No obstante, en las actuales circunstancias, de acuerdo con el principio inspirador que para el cumplimiento de las penas privativas de libertad proclama el artículo 4 del R.P.: «el interno es sujeto de derecho y no se halla excluido de la sociedad, sino que continúa formando parte de ella», debería de admitirse un derecho de asociación del recluso para fines lícitos: deportivos, culturales, benéficos, laborales y otros. Los reclusos podrían asociarse para constituir *cooperativas de trabajo*, sobre todo en estos tiempos de crisis en el que los talleres penitenciarios son incapaces de proveer de actividad a los mismos. El desarrollo de este derecho no está exento de dificultades. Tampoco ignoro los riesgos que pueden derivarse del mismo. A pesar de ello, creo que la prisión moderna debe organizarse de tal manera que sin merma del principio de seguridad, los derechos del recluso, y entre ellos, el de asociación, puedan tener una significativa y precisa efectividad.

Quisiera, finalmente, terminar con una cita de Salillas: «En lo penitenciario nos queda todo por hacer y nada por decir». Que estas palabras pronunciadas por ese gran penitenciarista, hace noventa y cinco años, no sigan constituyendo una realidad en nuestros días.

BIBLIOGRAFIA BASICA CONSULTADA

ANIYAR DE CASTRO, Lolita, *El tratamiento de delincuentes en el mundo visto a través del VIII Congreso Internacional de Criminología*, en *Anuario*, tomo XXXII, 1979, p. 479 y ss.

BERISTAIN IPIÑA, Antonio, *Cárceles españolas comunes y militares y sus sustitutivos*, en *Anuario*, tomo XXXII, 1979, p. 583 y ss.

BOIX REIG, Javier, *Aspectos de la Criminología en España*, en *Revista General de Derecho*, núms. 440-441, Valencia, mayo-junio, 1981, p. 16.

BUENO ARUS, Francisco, *El sistema penitenciario español*, en «Los sistemas penitenciarios contemporáneos», R.E.P., núms. 169-171, abril-diciembre, 1965, p. 208.

BUENO ARUS, Francisco, *Notas sobre la Ley General Penitenciaria*, en R.E.P., núms. 220-223, enero-diciembre, 1978, p. 20 y ss.

- CAMARA BOLIO, M.^a Josefina, *Las cárceles en Méjico y su evolución*, en *Anuario*, tomo XXXII, 1979, p. 141 y ss.
- COBO DEL ROSAL y BACIGALUPO, *Desarrollo histórico de la Criminología en España*, en Cuadernos de Política Criminal, n.º 11, 1980, p. 38.
- COBO DEL ROSAL y BOIX REIG, *Derechos fundamentales del condenado. Reeducación y reinserción social*, en Comentarios a la legislación penal, tomo I, *Derecho penal y Constitución*, Madrid, 1982, p. 217 y ss.
- FERNANDEZ ALBOR, Agustín, *La reforma penal y penitenciaria: Proyectos y realidad*, en Cuadernos de Política Criminal, n.º 15, 1981, p. 459 y ss.
- FULLY, G., *La observación, la clasificación y la orientación de los condenados*, en R.E.P., n.º 182, julio-septiembre, 1968, p. 516 y ss.
- GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, *Ley sobre la ejecución de la pena privativa de libertad y de las medidas de seguridad y corrección privativas de libertad. Ley de ejecución de penas*, en *Anuario*, tomo XXXI, 1978, pp. 395-445.
- GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, *La supuesta función resocializadora del Derecho penal: utopía, mito y eufemismo*, en *Anuario*, tomo XXXII, 1979, p. 645 y ss.
- GARCIA RAMIREZ, Sergio, *La prisión*, Fondo de Cultura Económica, México, 1975, p. 88 y ss.
- GARCIA VALDES, Carlos, *La Reforma Penitenciaria Española*, textos y materiales para su estudio, Madrid, 1981, p. 137 y ss.
- GARCIA VALDES, Carlos, *Comentarios a la legislación penitenciaria española*, 2.^a ed., Madrid, 1982, p. 83 y ss.
- GARCIA VALDES, Carlos, *Régimen penitenciario de España*, publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad de Madrid, 1975, p. 73 y ss.
- GARRIDO GUZMAN, Luis, *Manual de Ciencia Penitenciaria*, publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, 1983, p. 238 y ss.
- GOMEZ GRILLO, Elio, *Las prisiones en Latinoamérica*, en *Anuario*, tomo XXXIII, 1980, p. 689 y ss.
- INFORME DEL COMITE NACIONAL SUECO PARA LA PREVENCION DEL DELITO, n.º 5, Estocolmo, Suecia, julio 1978: *Un nuevo sistema de penas. Ideas y propuestas*, Introducción de CEREZO MIR y traducción de DIEZ RIPOLLES, en *Anuario*, tomo XXXII, 1979, p. 179 y ss.

- LEY GENERAL PENITENCIARIA, *Trabajos Parlamentarios*, Cortes Generales, Madrid, 1980, p. 86 y ss.
- LOPEZ-REY Y ARROJO, Manuel, *El tratamiento de los reclusos y los derechos humanos en Puerto Rico*, San Juan de Puerto Rico, 1970, p. 164 y ss.
- LOPEZ-REY Y ARROJO, Manuel, *Presupuestos de la orientación profesional penitenciaria*, Caracas, 1972, p. 18.
- MAPELLI CAFFARENA, Borja, *Principios fundamentales del sistema penitenciario español*, Barcelona, 1983, p. 240 y ss.
- MAPELLI CAFFARENA, Borja, *El régimen penitenciario abierto*, en Cuadernos de Política Criminal, n.º 7, 1979, p. 61 y ss.
- MARTIN GARCIA, Alicia, *Derecho penitenciario sueco: La Ley de 1974*, en Cuadernos de Política Criminal, n.º 14, 1981, p. 279 y ss.
- MIDDENDORFF, Wolf, *Teoría y práctica de la prognosis criminal*, trad. castellana de Rodríguez Devesa, Madrid, 1970, p. 179 y ss.
- MUÑOZ CONDE, Francisco, *Reformas penales de 1977*, en Cuadernos de Política Criminal, n.º 4, 1978, p. 118 y ss.
- MUÑOZ CONDE, Francisco, *Resocialización y tratamiento del delincuente en los establecimientos penitenciarios españoles*, en la Reforma penal, Madrid, 1982.
- ORDENAMIENTO PENITENCIARIO ESPAÑOL, Centro de Publicaciones, Ministerio de Justicia, Madrid, 1981.
- PEREZ FERRER, Eduardo E., *Razón de ser y existir del Derecho penitenciario*, en Anuario, tomo XXX, 1977, p. 409 y ss.
- POLAINO NAVARRETE, *Algunas observaciones críticas sobre el Ordenamiento penitenciario español*, en Cuadernos de Política Criminal, n.º 16, 1982, p. 155 y ss.
- I JORNADAS PENITENCIARIAS ANDALUZAS, libro colectivo que recoge las ponencias presentadas en las Primeras Jornadas Penitenciarias Andaluzas organizadas por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía en colaboración con el Departamento de Derecho penal de la Facultad de Derecho de Jerez de la Frontera, 12 y 13 de noviembre de 1982, Sevilla, 1983.
- RUIZ VADILLO, Enrique, *La ejecución de las penas privativas de libertad bajo la intervención judicial*, en Anuario, tomo XXXII, 1979, p. 15 y ss.
- SAINZ CANTERO, J. A., *La sustitución de la pena de privación de libertad*, en Estudios Penales II, La reforma penitenciaria, Universidad de Santiago de Compostela, 1978, p. 215 y ss.

SAINZ CANTERO, J. A., *El futuro de la pena privativa de libertad: la vía de la sustitución*, en el libro colectivo editado con motivo de las I Jornadas Penitenciarias Andaluzas, Sevilla, 1983, p. 77 y ss.

VIVES ANTON, T. S., *Régimen penitenciario y Derecho penal: reflexiones críticas*, en Cuadernos de Política Criminal, n.º 3, 1977, p. 246 y ss.